

PROPOSICIÓN MODIFICATIVA

Modifíquese el artículo primero (1) del proyecto de Ley No. 178 de 2020 *“Por medio de la cual se crean los cupos especiales en universidades públicas para los estudiantes pertenecientes a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras del país”*, **el cual quedará de la siguiente manera:**

“Artículo 1°. Las Universidades Públicas por intermedio de sus Consejos Superiores, **podrán** **deberán** crear políticas que promuevan programas de cupos especiales de acceso que faciliten el ingreso a los estudiantes reconocidos como negros, afrocolombianos, raizales o palenqueros.

Parágrafo 1. El ingreso, a través de los cupos especiales mencionados en el presente artículo, aplicará para cualquier programa de educación superior.

Parágrafo 2. La asignación que realice la Universidad **podrá** **deberá** tener en cuenta el porcentaje de población Negra, Afrocolombiana, Raizal y Palenquera que habite en la región de área de influencia de la misma, correspondiente al censo vigente del Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE.”]

JUSTIFICACIÓN

La presente proposición tiene su sustento en un elemento gramatical que implica efectos jurídicos diferentes que pueden o no, dependiendo de la palabra adecuada, concordar con la teleología del proyecto.

Verán. Se parte del supuesto que el espíritu del proyecto es garantizar a través de una Ley, es decir, una disposición imperativa, abstracta de orden público, que en las Universidades públicas del país, cupos especiales para estudiantes de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Pero dicho objetivo no podría cumplirse a cabalidad si el efecto jurídico del presente proyecto es el de facultar a las universidades públicas y no generar un deber en cabeza de las mismas.

La palabra “podrán” contenida en el texto del artículo primero implica una facultad, un albedrío, más no una obligación. Lo que quiere decir que no es exigible a las universidades el cumplimiento de la política que se quiere implementar con este proyecto. Lo que también permite concluir que el proyecto nace sin dientes que aseguren un verdadero efecto en las comunidades que busca proteger con las medidas. Por lo anterior, el uso adecuado de las palabras a la luz de los fines del proyecto permitirá calidad jurídica y menos interpretación de la voluntad del



legislador ante la ambigüedad o lo difuso de la redacción de las normas. En ese orden de ideas, la palabra “deberán”, implica una obligación y elimina el elemento facultativo de la disposición, dejando de lado el arbitrio de la entidad educativa y garantizando el cumplimiento del proyecto de Ley de ser Ley de la República.

Finalmente, resulta absurdo promulgar una Ley de la República que establezca una situación previamente existente dentro del ordenamiento jurídico colombiano. Es decir, a la luz del principio de autonomía de la voluntad contenido en la constitución política, las universidades ya gozan precisamente de facultades como las que bajo el texto original gozarían de todas maneras. Ellas hoy en día pueden implementar en sí mismas, modo propio, medidas como las que propone el proyecto de Ley. No debe existir una Ley que les de tales facultades.

Por ello es que resulta adecuado concluir que lo que se busca al incluir tales supuestos en una Ley del República, es la imperatividad que tal norma naturalmente implica, lo que en concordancia debe manifestarse a través del concepto “deber” y su respectiva conjugación en el contexto del artículo. Es por ello, que debe sustraerse la naturaleza facultativa de la redacción e incluir la impositiva a través de la palabra indicada. De lo contrario, la Ley es repetitiva, pues ya la constitución permite que las Universidades públicas en este caso, adopten entre otras, este tipo de medidas bajo la garantía del principio de autonomía universitaria.

Enrique Cabrales Baquero
Representante a la Cámara por Bogotá D.C.
Centro Democrático

